CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

**ACTOR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,
ESTADO DE MORELOS**

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veinticuatro, se da cuenta a la **Ministra Lenia Batres Guadarrama**, instructora en el presente asunto, con lo siguiente:

Constancias	Registros
1. Expediente de la controversia constitucional al rubro indicada, promovida por Sergio Guillermo Alba Esquivel, quien se ostenta como presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos.	17806
2. Escrito de Sergio Guillermo Alba Esquivel, quien se ostenta como presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos.	18337

La demanda de controversia constitucional y el segundo escrito de cuenta se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal,¹ de los que se advierte que esencialmente son de idéntico contenido. Conste.

Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veinticuatro.

I. Demanda y actos impugnados. Vistos los escritos de demanda de quien se ostenta como presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, en atención a que son esencialmente de contenido idéntico, el segundo de los presentados obrará agregado al expediente como un duplicado y, en relación con el primero, se procede a proveer.

La controversia constitucional es promovida por quien se ostenta como presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, en contra del Poder Legislativo de la referida entidad federativa, en la que se impugna:

“IV. ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA

Se solicita que se declare la invalidez del Decreto por el que se aprueba el Dictamen con punto de acuerdo relativo a la ‘Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Septiembre de 2024’, aprobado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos en sesión de publicado 11 (sic) de Septiembre de 2024.”.

II. Desechamiento. Al respecto, del análisis integral de las constancias que integran el expediente, se arriba a la conclusión de que **debe desecharse la demanda de controversia constitucional** a que se refiere este asunto, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

¹ **Interposición de la controversia constitucional.** La demanda fue depositada en el buzón judicial de este alto tribunal el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro; registrada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de septiembre siguiente, y turnada conforme el auto de radicación y turno de diecinueve del citado mes y año, el cual fue publicado en las listas de este tribunal constitucional el veintiséis de septiembre del año en curso.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

En primer término, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ministra instructora está facultada para desechar de plano la demanda de controversia constitucional, si advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Así, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que por **manifiesto** debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo **indudable** se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa, lo que se corrobora con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por “manifiesto” debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo “indudable” resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.”.

En el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, en relación con el artículo 105, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en correlación con el transitorio Segundo, del **“DECRETO por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”**, publicado el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación, **que dispone que resultan improcedentes las controversias constitucionales que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la CPEUM.**

El referido artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de la materia establece que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la mencionada normativa, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino que también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integra y de las bases constitucionales que la rigen, de conformidad con la tesis de rubro y texto:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delimitan el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo.”

En efecto, el artículo 105, párrafo quinto, de la CPEUM, así como el invocado Decreto, establecen:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

...

Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución.

...”

(Lo subrayado es propio)

“DECRETO

‘EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 107 Y ADICIONADO UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INIMPUGNABILIDAD DE LAS ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. ...

I. a III. ...

...

...

...

Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución.

Artículo 107. ...

I. ...

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejasas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución.

...

...

...

...

...

...

III. a XVIII. ...

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2024.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Gerardo Fernández Noroña, Presidente.- Dip. Julieta

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

Villalpando Riquelme, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.'

*En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 31 de octubre de 2024.- **Claudia Sheinbaum Pardo**, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Lic. **Rosa Icela Rodríguez Velázquez**, Secretaria de Gobernación.- Rúbrica”.*

(Lo subrayado es propio)

De la reproducción que antecede se aprecia que el texto constitucional expresamente establece **la improcedencia** de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la CPEUM. Es decir que, la SCJN, como la instancia competente para conocer de los mencionados medios de control constitucional, no podría declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones que se realicen a la Constitución mexicana mediante el proceso de reforma o adición contemplado en el artículo 135 constitucional, en virtud de que existe un mandato constitucional que prohíbe expresamente su procedencia.

Luego, si el municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, impugna el Decreto por el que el Poder Legislativo de la citada entidad, aprobó el “Dictamen con punto de acuerdo relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.

Entonces su pretensión, es que esta SCJN revise si el Congreso del estado de Morelos cumplió con el procedimiento legislativo al aprobar el Decreto por el que se modifica la Constitución mexicana con la reforma constitucional al Poder Judicial.

En esa línea argumentativa, el texto actual del párrafo quinto del artículo 105 de la CPEUM, establece de manera expresa y clara la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la propia CPEUM, por lo que el presente medio de control no resulta procedente en virtud de que la SCJN es incompetente para conocer de una controversia constitucional que busca invalidar una reforma realizada a la propia CPEUM. Para el caso de que el Constituyente Permanente hubiera pretendido que esta SCJN ejerciera alguna facultad revisora en materia de reformas o adiciones constitucionales, la hubiera establecido de forma expresa en el propio texto constitucional, lo cual no sucede en el marco jurídico mexicano; por el contrario, la Constitución no solo no faculta, sino que prohíbe dicha intervención en su artículo 105, párrafo quinto.

Es importante destacar que la reforma al artículo 105, realizada mediante el Decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, de la CPEUM, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal tiene la intención de mantener el respeto de los límites de la jurisdicción y a las decisiones adoptadas legítimamente por el Poder Reformador.

De esta manera, se insiste, **la controversia constitucional no es la vía para impugnar una reforma a la constitución**, por lo que en el caso concreto, se actualiza una causal de improcedencia de la acción manifiesta e indudable, puesto que a través de dicho mecanismo solo puede cuestionarse la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, y que se susciten entre la Federación y un municipio; dos municipios de diversos estados; un

estado y uno de sus municipios, pero **no en contra de reformas ni adiciones a la Constitución, como las contenidas en el decreto de reforma constitucional cuestionado.**

Sirve de apoyo a la anterior consideración, por analogía de razón, el criterio mayoritario del Tribunal Pleno contenido en la tesis P. V/2009, de rubro y texto siguiente:

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU OBJETO DE TUTELA, RESPECTO DE “NORMAS GENERALES”, SÓLO COMPRENDE LEYES ORDINARIAS, FEDERALES O LOCALES Y NO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Del artículo 105, fracción II, de ese ordenamiento, así como del procedimiento que le dio origen, se advierte que el Órgano Reformador estableció a la acción de inconstitucionalidad como un medio de control de “normas generales”, entendidas éstas como leyes ordinarias, federales o locales, expedidas por los órganos legislativos así como los tratados internacionales enunciados en la indicada fracción II, sin comprender otro tipo de normas, entre ellas, las reformas constitucionales. En efecto, dicho precepto distingue el término “disposiciones generales” o “normas generales”, e incluso, “leyes electorales federales”, “leyes electorales locales” y “tratados internacionales” de la acepción “Constitución”, la cual, de acuerdo con el propio numeral, es el referente para examinar la ley o tratados, es decir, lo que se sujeta a control es que dichas “disposiciones generales”, incluidas las electorales, sean conformes con la Ley Suprema, por lo cual no puede interpretarse que al aludir el citado artículo 105, fracción II, a “normas generales”, se hubiera comprendido a la propia Constitución, pues de su interpretación integral se entiende que limita su objeto de examen a las leyes en sentido estricto, esto es, a las expedidas por el legislador ordinario, sea federal, de los Estados o del Distrito Federal. Además, el indicado precepto constitucional sólo legitima para promover aquel medio de control a un porcentaje determinado de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las Legislaturas Locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que, precisamente, las hubieran expedido, por lo que no comprende al Órgano Reformador de la Constitución que no constituye un órgano legislativo ordinario, de los enunciados en el artículo 105 constitucional”.

De lo anterior se colige que la controversia constitucional no es la vía idónea para ejercer el control de la regularidad constitucional del contenido de las reformas a la propia CPEUM, toda vez que la propia naturaleza del referido medio de control no contempla la posibilidad de que esta SCJN pueda ejercerlo contra del procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional, ni mucho menos que pueda hacerlo respecto de la constitucionalidad del contenido de tales reformas, más aún cuando desde el quince de septiembre del año en curso, dicha reforma ya es parte del propio texto constitucional.

En consecuencia, resulta válido sostener que si el municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, pretende promover una controversia constitucional en contra del procedimiento legislativo del Congreso del estado, al aprobar el Decreto por el que se modifica la constitución mexicana con la reforma constitucional al Poder Judicial, **dicha controversia es notoriamente improcedente.**

Robustece a lo anterior los criterios sostenidos por esta SCJN en los recursos de reclamación **8/2016**, derivado de la acción de inconstitucionalidad 15/2016 y **9/2016**, derivado de la acción de inconstitucionalidad 17/2016, decididos el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por mayoría de siete votos y el dos de mayo de dos mil dieciséis con ocho votos, respectivamente, en los que este alto tribunal resolvió que no es posible cuestionar una reforma constitucional a través de un medio de control constitucional, por lo que es imposible que a través de este mecanismo constitucional se someta a la propia Constitución a un control de constitucionalidad.

No es óbice a la anterior conclusión que la demanda de controversia constitucional haya

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

sido presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN, esto es, antes de la entrada en vigor de la reforma al artículo 105, párrafo quinto, de la CPEUM, por el que se establece la inimpugnabilidad de reformas o adiciones a la CPEUM. Lo anterior, porque el presente asunto se **encuentra actualmente en trámite y debe resolverse en términos de dicha reforma**, como lo establece el transitorio Segundo del aludido Decreto que dispone textualmente: *“los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”*. En ese sentido, debe señalarse que a este tipo de normas tiene un efecto inmediato, es decir, es aplicable a todos los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor.

Por otra parte, se advierte que, en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, en relación con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, por **falta de legitimación procesal del promovente**.

En el caso, el escrito de demanda fue suscrito por quien se ostenta como presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, sin embargo, tal carácter no lo faculta para acudir ante este alto tribunal, vía controversia constitucional; esto, toda vez que se advierte de manera clara y patente que **no acredita contar con la representación legal de dicha entidad**, en razón de que **la representación recae en el síndico municipal**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que establece:

“Artículo 45. Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las siguientes atribuciones:

(...)

II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos;

(...).”

En este sentido, **el referido presidente municipal no acreditó tener la representación del municipio actor**, motivo por el cual, si el promovente carece de facultades para representar al ente público, en términos de lo dispuesto por la legislación local, es evidente que no se actualiza el supuesto establecido en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia; lo que se corrobora con las tesis de rubros y textos siguientes.

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESA ACCIÓN. El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado estrechamente con el artículo 10 del propio ordenamiento que señala como actor en las controversias constitucionales a la entidad, poder u órgano que la promueva, establece la presunción de que quien comparezca a juicio en su representación goza de tal representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Sin embargo, debe considerarse que tal presunción no opera cuando de la demanda derive que quienes pretenden actuar con tal carácter carecen de legitimación para ejercitar la acción de controversia constitucional al expresarse que el carácter referido lo derivan de actuaciones realizadas al margen de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, pues en esa hipótesis debe desecharse la demanda pues al carecer de legitimación no pueden representar a la entidad, poder u órgano que como parte actora puede promover la controversia

constitucional.”.

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Si bien la falta de legitimación no está expresamente considerada como causa de improcedencia dentro del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, también, la fracción VIII dispone que dicha improcedencia puede derivar de alguna disposición de la propia ley. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o. y 10, fracción I, de la ley reglamentaria que rige este procedimiento, sólo las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal podrán promover la acción de controversia constitucional y si la parte promovente no tiene este carácter, es claro entonces que ésta no puede ejercer la acción constitucional de mérito y que este motivo de improcedencia deriva de la ley en cita. Asimismo, si el promovente también carece de facultades para representar al ente público, en términos de lo dispuesto por la legislación ordinaria que lo rige y no hay motivo para presumirla, es evidente que no se surten los extremos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria, que establece los medios para acreditar la representación y capacidad de los promoventes; y de ahí que también, por esta causa, surja la improcedencia de la vía de la propia ley. En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria.”.

Asimismo, resulta relevante tener presente lo que debe entenderse por legitimación procesal, la cual consiste en la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, tratándose de controversias constitucionales, conforme a lo previsto por el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, que en lo que interesa, literalmente establece lo siguiente.

“Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.”.

Así, en el presente asunto, promueve controversia constitucional quien se ostenta como presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos; sin embargo, el carácter con el que comparece no lo faculta para tener la representación legal, como se ha indicado en párrafos precedentes, por lo que **carece de legitimación procesal activa para accionar el presente medio de control constitucional.**

A mayor abundamiento, se estima que también procede desechar la presente controversia constitucional, dado que es posible advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el precepto 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que **el municipio actor carece de interés legítimo** para intentar el presente medio de control constitucional, toda vez que no aduce una violación directa a una atribución o derecho constitucionalmente tutelado.²

Como bien se anticipó, procede desechar la presente controversia constitucional, pues **de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, se advierte que el municipio actor carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional,** debido a que el conflicto planteado en la demanda no se relaciona

² **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO.** Tesis P./J. 42/2015 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, t. I, p. 33, registro digital 2010668.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

con la invasión de esferas competenciales, sino de una apreciación meramente subjetiva del promovente.

En efecto, la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la CPEUM confiere a los órganos originarios del Estado; ello, a fin de resguardar el sistema federal y el principio de división de poderes. Así, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o la norma general impugnados se cause cuando menos, un principio de agravio a las competencias constitucionales reconocidas en favor del órgano promovente, acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro y texto que se transcriben a continuación:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es “CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.”, que en la promoción de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un interés legítimo para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”.

Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de reclamación **150/2019-CA**, derivado de la controversia constitucional **279/2019**, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, ha precisado **que la materia de estudio en controversias es puramente constitucional**, lo que se traduce que, para incoar esta instancia, **es necesario que el actor aduzca una violación directa a una atribución o derecho que le reconozca la CPEUM**, dejando a un lado todas aquellas violaciones de carácter indirecto, es decir, **en las que se plantee infracciones a disposiciones secundarias, que se traducirían en transgresiones al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales**, siendo la demanda, en estos últimos casos, notoriamente improcedente.

De esta manera, el Tribunal Pleno precisó que el actor carece de interés legítimo cuando lo alegado implique violaciones indirectas a la CPEUM, pues lo que se tutela en la controversia constitucional es la regularidad del ejercicio de las atribuciones constitucionales del órgano originario del Estado, así como aquellas transgresiones directas a la Constitución que afecten un derecho reconocido por ésta en favor del actor.

En el caso que nos ocupa, el municipio actor impugna de forma destacada lo que considera una omisión del Poder Legislativo del estado de Morelos de someter a su conocimiento a fin de que participara y aprobara el Decreto por el que se aprueba el dictamen con punto de acuerdo relativo a la “Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual fue aprobado por el Congreso morelense el once de septiembre de dos mil veinticuatro.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

Ahora bien, el municipio de Emiliano Zapata aduce la violación de los artículos 39, 40, 115, 116, 124 y 135 de la Constitución Federal, sin embargo, del análisis de sus argumentos se aprecia que **no van encaminados a plantear un conflicto de orden constitucional relacionado con la defensa de competencias otorgadas directamente por la Ley Fundamental**, sino que, por el contrario, se limita a señalar que a partir de una interpretación evolutiva del artículo 135 constitucional se desprende que los municipios, al ser parte de los tres órdenes de gobierno previstos en la CPEUM, deben participar en el proceso de reforma a la Constitución, como acontece en los procesos de reforma a las constituciones de las entidades federativas.

En ese tenor, es factible advertir que la parte actora pretende que por la vía de controversia constitucional se estudien aspectos que no se desprenden de la CPEUM; es decir, las violaciones de las cuales se adolece las hace descansar de manera preponderante en la interpretación y aplicación de disposiciones emanadas de la Constitución del estado de Morelos. Pues, se insiste, **ninguno de los preceptos del texto constitucional federal que cita prevén la participación de los municipios en el proceso de reformas a la CPEUM.**

En ese sentido, debe decirse que para la procedencia de la controversia constitucional, no basta con que el demandante se limite a afirmar que se vulneran sus competencias establecidas constitucionalmente, pues además de este aspecto meramente enunciativo, es necesario que del análisis integral del escrito de demanda pueda advertirse al menos preliminarmente un conflicto competencial de orden constitucional, lo cual, como ya se dijo, no se satisface en el presente asunto, pues los planteamientos del municipio actor no involucran algún agravio de carácter constitucional en su perjuicio, por el contrario, **se** encaminan a solicitar que este alto tribunal estudie la legalidad del procedimiento legislativo en cuanto a su participación en el proceso de reforma de la CPEUM.

Por supuesto, no se deja de advertir que en una parte de su escrito de demanda, el promovente sostiene que la actuación de la autoridad demandada vulnera el pacto federal, al no permitir a los municipios participar en los indicados procesos de reforma. Sin embargo, debe precisarse que dicha afirmación por sí sola es insuficiente para justificar la procedencia de este medio de control constitucional, pues lo cierto es que de la revisión integral del escrito inicial se desprende con claridad que la violación al referido principio se hace depender directamente de lo que establece la Constitución local y de interpretaciones subjetivas del actor.

Cabe reiterar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen únicamente sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas en el texto constitucional.

De lo anterior, se deduce que lo argumentado por la parte actora **no se relaciona con la defensa de las competencias constitucionales del municipio**, lo cual es absolutamente ajeno al objeto de protección del presente medio de control constitucional, aunado a que las vulneraciones que se plantean se relacionan únicamente con aspectos intraprocesales del procedimiento legislativo en el Estado de Morelos.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

Así, el examen de legalidad de los actos impugnados no corresponde a la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de las controversias constitucionales, ya que como se indicó, el objeto de éstas es la de estudiar conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde.

Por las razones expuestas, **la presente demanda debe desecharse de plano, al ser manifiesto e indudable que: i) no resultan procedentes las controversias constitucionales en contra de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ii) el promovente carece de legitimación procesal activa, y iii) el municipio carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional,** lo que actualizan los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 19, fracciones VII y IX, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 11, párrafo segundo, en relación con el numeral 105, fracción I, inciso i) y párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el transitorio Segundo, del “*DECRETO por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal*”, por lo que, aun cuando se admitiera ésta y se sustanciara el procedimiento, no sería factible llegar a una conclusión diversa; siendo aplicable la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.”.

III Solicitudes del promovente. Derivado del desechamiento del presente asunto por falta de legitimación activa del promovente, en vía de consecuencia, no ha lugar a acordar favorablemente la designación de autorizados, ni el acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas por conducto del usuario que al efecto indica, en representación del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos.

Aunado que para efecto de tener acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas por conducto del usuario que al efecto indica, resulta indispensable proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de quien se solicita la autorización correspondiente, esto para estar en posibilidad de poder verificar la vigencia y autorización de la firma electrónica proporcionada, en términos de los artículos 5, párrafo primero, 12 y 17, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario **8/2020**.

Por tanto, con apoyo en las disposiciones legales y las tesis citadas, se **ACUERDA:**

ÚNICO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda interpuesta por el presidente del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos.

Notifíquese; por lista y por oficio, en su residencia oficial, al municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, esto, al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

En ese orden de ideas, remítase la versión digitalizada de este auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, con

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 280/2024

residencia en la ciudad de Cuernavaca, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario **12/2014**, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 4, párrafo primero, y 5 de la Ley Reglamentaria de la materia, **lleve a cabo la diligencia de notificación por oficio al municipio de Emiliano Zapata de la mencionada entidad, en su residencia oficial, de lo ya indicado.**

Lo anterior, en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, hace las veces del despacho **975/2024**, por lo que se requiere al órgano jurisdiccional respectivo, a fin de que en auxilio de las labores de este alto tribunal, a la brevedad posible, lo devuelva debidamente diligenciado por esa misma vía, **adjuntando únicamente la constancia de notificación y la razón actuarial respectiva.**

Cúmplase y una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo proveyó y firma la **Ministra instructora Lenia Batres Guadarrama**, quien actúa con el **Licenciado Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este alto tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al proveído de seis de diciembre de dos mil veinticuatro, dictado por la **Ministra instructora Lenia Batres Guadarrama**, en la controversia constitucional **280/2024**, promovida por el municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos. Conste.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	LENIA BATRES GUADARRAMA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	BAGL690806MDFTDN00			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a663200000000000000000000ab15	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	13/01/2025T22:09:53Z / 13/01/2025T16:09:53-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	81 57 65 4c 07 e3 ff f9 5e e4 6f 7c fe 5b 1c 00 c0 23 d8 41 d2 a2 03 e5 05 95 b4 0c a8 04 76 d0 a0 db 17 eb 8b a3 fd 45 d4 b6 5b 16 8a 90 e3 5d aa 25 00 9d f7 3f d2 43 b4 6c 16 d0 93 af 6c bd 1b 4d 61 60 6a b2 43 4e 04 9e bb 81 53 ad 29 d1 0d e5 31 fe 83 93 56 d4 0e ca 49 d5 c8 92 a8 fc cb e0 6f 39 d0 07 fd 72 bf 66 a1 6e 7c a6 87 29 21 70 d0 7f 3a 54 9e ca 61 79 07 d0 bf 2a 61 24 ee 4f 92 9c 32 f4 80 e6 f8 7e 85 8f b7 d5 70 18 9f ad 51 9d 38 56 57 9a 67 67 56 6b d3 c9 a9 47 5b 63 b5 06 1b 6c 1f 20 63 6c d1 93 1c da c8 9b 9d 58 7f 4a 63 56 4a e8 6e 59 fd 69 98 d8 f3 18 0b 50 a4 7d c8 3b ce 67 dd f5 f5 04 a3 71 b8 7c 00 93 21 81 d4 70 73 00 c1 d5 d1 2c 43 25 54 2a 77 73 b5 e8 c8 55 63 1e 91 ce 13 e6 18 f3 42 a7 6c 8e 42 b5 1c d5 13 cb 37 b8 9d a6 c9 c6 49 06			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	13/01/2025T22:09:38Z / 13/01/2025T16:09:38-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a663200000000000000000000ab15			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	13/01/2025T22:09:53Z / 13/01/2025T16:09:53-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8009395			
	Datos estampillados	E74552855607215F1915680460AADA342510733C1E9FBA3F995C722D9CE953A2			

Firmante	Nombre	EDUARDO ARANDA MARTINEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AAME861230HOCRRD00			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a663200000000000000000000a630	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/12/2024T21:08:06Z / 09/12/2024T15:08:06-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	b4 1b 83 14 6f 09 11 21 b0 8f ae f1 15 6b 7f 87 b1 7e 17 50 f8 de 55 e9 74 80 c1 66 7a 1c 2d f0 c0 ce ae ed 4d 18 21 a9 7d 5d 41 d3 43 22 37 f9 9c a1 94 bc ba 96 c0 8c 38 cf 04 54 d5 d7 11 0f 8a 3d f7 9a 0b 3e 01 74 7b ee c6 c0 6a 6a 12 47 ef 4a f6 65 f2 3e 6d 34 16 fe 1b b5 d6 06 25 9c 3b 9e 7c 74 e0 32 ba f6 3a 9d 45 e6 20 c4 2d 0a c6 e3 aa 4f 20 0a c5 f2 5b e1 df 01 a4 65 ca 1d bf e0 27 f8 75 b4 ca ae 98 a1 48 42 24 22 7a ee 8c c6 23 02 d2 d5 2b 8a 3f 24 87 58 66 5f 4f aa cd d8 ca 1d a7 74 fa 0c d1 47 72 c0 90 05 bc 58 d2 20 bf 0b 19 1e 5f 0f 56 48 26 ce 43 35 9b 6a 78 8a 15 d8 6f 59 d5 29 66 d3 ab 61 cf 8f 61 5f fb 83 49 a5 44 ff b0 b1 50 d7 aa 36 84 f3 38 ec 73 3d 41 17 82 17 e3 49 9d 2c 41 f3 d0 70 e4 98 4a 53 3f 2f fb a1 52 34 f9 bb 6c dc 38 bf a4 cc			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/12/2024T21:08:07Z / 09/12/2024T15:08:07-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a663200000000000000000000a630			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/12/2024T21:08:06Z / 09/12/2024T15:08:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	7914977			
	Datos estampillados	3D162E97701379740F0C218ED43195FC63165F834581F26DD4CFD1A08B3595B8			